



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/WG.6/2/LKA/3
3 de abril de 2008

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
Segundo período de sesiones
Ginebra, 5 a 16 de mayo de 2008

**RESUMEN PREPARADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
PARA LOS DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 15 c)
DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL CONSEJO
DE DERECHOS HUMANOS**

Sri Lanka*

El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones¹ presentadas por 32 interlocutores para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. Como la periodicidad del examen en el primer ciclo es cuatrienal, la información recogida en este informe se refiere principalmente a hechos ocurridos después del 1° de enero de 2004.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. ANTECEDENTES Y MARCO

A. Alcance de las obligaciones internacionales

1. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) señaló con preocupación que, en un fallo emitido en 2006, la Corte Suprema de Sri Lanka había determinado que la adhesión del país al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que autorizaba a un particular a presentar una queja ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una vez que hubiera agotado todos los recursos internos disponibles, era inconstitucional². Según un Informe conjunto de la sociedad civil, la posterior Ley sobre el Pacto Internacional de Derechos Humanos de 2007 no incluía los derechos más importantes enunciados en el Pacto ni realizaba una aportación sustancial al capítulo sobre derechos fundamentales de la Constitución³.

B. Marco constitucional y legislativo

2. Amnistía Internacional señaló que los derechos civiles y políticos sufrieron nuevas restricciones tras la aprobación del nuevo Reglamento de Excepción en agosto de 2005, que autorizaba al Gobierno a desplegar el ejército en operaciones de acordonamiento y registro y a detener sin cargos a toda persona sospechosa de actividades terroristas. Preocupaba a Amnistía Internacional el hecho de que muchas de las disposiciones del Reglamento de Excepción hubieran sido redactadas de forma imprecisa y, por consiguiente, pudiera interpretarse que una amplia gama de actividades como las investigaciones y los informes de los medios de difusión eran constitutivas de delito. También se había denunciado la aplicación discriminatoria del Reglamento contra los tamiles⁴. Amnistía Internacional recomendó que el Gobierno aboliera toda la legislación de excepción en vigor para ajustar la legislación nacional al derecho y las normas internacionales relativos a los derechos humanos⁵.

C. Estructura institucional y de derechos humanos

3. Amnistía Internacional comunicó que en la 17ª enmienda a la Constitución, aprobada por el Parlamento en 2001, se establecía un Consejo Constitucional independiente integrado por diez miembros con el mandato de recomendar los nombramientos para los principales cargos públicos a fin de asegurar su independencia⁶. Sri Lanka Democracy Forum señaló que el hecho de que no se nombraran los miembros del Consejo Constitucional y la posterior decisión del Presidente de designar directamente a los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sri Lanka y de la Comisión de Policía eran indicativos del control que ejercía el poder ejecutivo sobre los órganos encargados de administrar la justicia penal⁷.

4. Según la OMCT, el Comité de Coordinación Internacional de Instituciones Nacionales había rebajado recientemente la categoría de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka de miembro de pleno derecho a mero observador, tras llegar a la conclusión de que el nombramiento de los miembros de la Comisión había sido irregular y su funcionamiento no había sido equilibrado ni objetivo⁸. Además, como señaló Amnistía Internacional, la Comisión se había declarado públicamente incapaz de investigar desapariciones⁹. Human Rights Watch añadió que la obstrucción de las fuerzas de seguridad y la falta de apoyo del Gobierno¹⁰ habían anulado en la práctica la autoridad en materia de supervisión e investigación de la Comisión de Derechos Humanos. Con referencia a la oficina de la Comisión en Jaffna, People for Equality and Relief in Sri Lanka comunicó que la Comisión no había podido investigar ni dar seguimiento a las denuncias formuladas por cientos de ciudadanos sobre ejecuciones extrajudiciales y secuestros por miedo a las repercusiones si denunciaba los hechos públicamente en una zona altamente militarizada¹¹.

5. En el Informe conjunto de la sociedad civil (ICSR) se indicaba que el Gobierno solía responder a las críticas por los abusos de los derechos humanos con la creación de numerosas instituciones, comités y comisiones de investigación ad hoc, que no habían logrado poner a disposición judicial a los autores de los hechos y no habían hecho nada por impedir los abusos¹². Sri Lanka Democracy Forum (SLDF) señaló que la comisión de investigación más destacada era la Comisión Presidencial de Investigación, que investigaba las violaciones graves de los derechos humanos, y el Grupo Internacional Independiente de Personas Eminentes. Si bien Sri Lanka Democracy Forum consideraba que la Comisión Presidencial de Investigación y el Grupo Internacional Independiente estaban capacitados para hacer frente al problema de la impunidad, señaló que ninguno podía considerarse un sustituto del sistema internacional de vigilancia de los derechos humanos o del sistema de justicia penal¹³. Sri Lanka Democracy Forum afirmó que la Comisión Presidencial de Investigación no había logrado concluir ni un solo caso en su primer año de existencia y señaló que ni la Comisión ni el Grupo Internacional Independiente habían resultado eficaces como elementos de disuasión contra los abusos y no habían conseguido hacer justicia a las familias de las víctimas¹⁴.

6. Según el Informe conjunto de la sociedad civil, hace cerca de diez años el Estado publicó un proyecto de ley para establecer una comisión independiente sobre asuntos de la mujer. El Gabinete había tenido ante sí el proyecto de ley durante años, pero el Parlamento aún no lo había aprobado¹⁵.

II. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL TERRENO

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

7. Según la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el ACNUDH y distintos interlocutores nacionales habían exigido el establecimiento de una presencia internacional de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en Sri Lanka¹⁶. Sri Lanka Democracy Forum consideraba que en el momento actual era indispensable la presencia de una operación de derechos humanos de las Naciones Unidas en el país, la cual, con un mandato de protección, vigilancia, investigación y publicación de informes, contribuiría a proteger los derechos humanos y acabar con la cultura de la impunidad¹⁷. Christian Solidarity Worldwide instó al Gobierno y a los Tigres de Liberación del Ealam Tamil a permitir la presencia de observadores de la situación de los derechos humanos internacionales independientes¹⁸.

8. La CIJ puso de relieve que, desde mediados de 2004, el ACNUDH había enviado un Asesor superior de derechos humanos al equipo de las Naciones Unidas en el país. La función del Asesor se vio limitada por su mandato. Su logro principal había consistido en desplegar a varios voluntarios para prestar apoyo a las oficinas regionales de la Comisión de Derechos Humanos y facilitar la cooperación entre organismos de derechos humanos. Según la CIJ, en comparación con las misiones del ACNUDH en los países, la capacidad del Asesor superior de derechos humanos era insignificante¹⁹.

B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

1. Igualdad y no discriminación

9. Según una comunicación conjunta presentada por tres organizaciones no gubernamentales (ONG) (comunicación conjunta N° 2), las mujeres podían ser consideradas como un grupo especialmente vulnerable que era objeto de discriminaciones por motivos de etnia, casta, clase

social y género simultáneamente. Las tasas de desempleo eran especialmente altas entre las mujeres y algunas habían respondido a la situación sumándose a la oleada de emigrantes²⁰. Women and Media Collective señaló que el proyecto de ley sobre los derechos de la mujer aún no había sido finalizado ni aprobado por el Parlamento, y que la violación marital sólo se reconocía en casos de separación judicial²¹. El Centro de Derecho de Vivienda y Desahucios instó a Sri Lanka a examinar todas las leyes discriminatorias contra la mujer y a derogarlas o modificarlas a fin de garantizar la observancia de las normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas²².

10. Women and Media Collective señaló que la política estatal de distribución de la tierra consistía en registrar la propiedad a nombre del cabeza de familia; tradicionalmente sólo los hombres se consideran cabezas de familia, a menos que hubieran fallecido o desaparecido. Las mujeres musulmanas del este del país eran propietarias de casi el 95% de las casas destruidas por el *tsunami*, pero fueron privadas del título de propiedad de las casas que las reemplazaron, que fueron registradas a nombre del varón adulto de la familia²³.

11. En la comunicación conjunta N° 2 se informaba de que, a pesar de que la discriminación explícita por razón de casta parecía haber disminuido de forma gradual en la mayor parte del país, algunas investigaciones realizadas recientemente habían revelado que continuaban existiendo bolsas de población marginal en diversos lugares, como Mahaiyawa, en Kandy, Wilgoda, en Kurunegala, y los campamentos de desplazados internos de la península de Jaffna²⁴. En la comunicación se instaba al Gobierno a revisar y aplicar el marco jurídico a fin de establecer recursos nacionales efectivos y prohibir las prácticas discriminatorias en lugares públicos y privados²⁵.

12. Equal Ground puso de relieve algunos de los principales problemas a que se enfrentaba la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y personas que cuestionaban su identidad sexual de Sri Lanka en relación con sus derechos humanos, como el discurso de incitación al odio, con aprobación del Estado, por razones de orientación sexual, la utilización del ordenamiento jurídico para hostigar a los defensores de los derechos humanos que promueven los derechos de las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales, los transexuales y las personas que cuestionaban su identidad sexual, la impunidad de los delitos cometidos contra esa comunidad, la violencia, las amenazas de muerte y las ejecuciones extrajudiciales basadas en la orientación sexual, la marginación y la persecución generalizada²⁶. El Informe conjunto de la sociedad civil añadía que a esas personas se les negaba el acceso a los servicios de salud, la educación y el empleo y la capacidad de participar en la vida social y pública²⁷.

2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

13. Human Rights Watch (HRW) señaló que las hostilidades entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación Ealam Tamil se habían reanudado a mediados de 2006 y en enero de 2008 el Gobierno había roto oficialmente el acuerdo de cesación del fuego y expresó su profunda preocupación por la posibilidad de que, con el final de la cesación del fuego, se intensificaran los abusos²⁸. HRW denunció que los Tigres de Liberación Ealam Tamil habían lanzado ataques dirigidos expresamente contra la población civil con minas terrestres activadas por control remoto y atentados suicidas con bombas. También habían asesinado a personas que consideraban sus adversarios políticos y reclutado por la fuerza a personas de etnia tamil. Según Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad de Sri Lanka habían bombardeado y lanzado obuses indiscriminadamente que habían causado víctimas civiles y habían provocado numerosas desapariciones²⁹. Christian Solidarity Worldwide añadió que el Gobierno, los Tigres de Liberación Ealam Tamil, el grupo Karuna y otros grupos paramilitares habían sido acusados de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales³⁰. Por lo que respecta al aumento de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, Minority Rights Group International destacó que existían

pruebas sólidas de que el ejército de Sri Lanka estaba cometiendo violaciones de los derechos humanos en connivencia con la facción Karuna escindida y otros grupos paramilitares³¹.

14. En el Informe conjunto de la sociedad civil se señaló que en los últimos dos años habían aumentado las violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, incluidos los ataques contra la población civil y contra lugares de culto, hospitales y escuelas, así como el reasentamiento forzoso de desplazados internos³². People for Equality and Relief in Sri Lanka destacó que en las zonas de alta seguridad del norte y el este del país, las fuerzas de seguridad se habían incautado de viviendas civiles sin ofrecer ningún tipo de pago o recurso³³. Asian Centre for Human Rights señaló que los grupos armados de la oposición habían cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario tales como asesinatos, secuestros y reclutamiento de niños soldados. Entre los agentes no estatales, los Tigres de Liberación Ealam Tamil seguían siendo los principales autores de violaciones del derecho internacional humanitario, en particular mediante ataques con dispositivos explosivos dirigidos expresamente contra la población civil³⁴. Sri Lanka Democracy Forum añadió que, en repetidas ocasiones, los Tigres de Liberación Ealam Tamil habían impedido que la población civil huyera de las zonas en que se estaban produciendo ataques del ejército para utilizarlos como escudos humanos³⁵. El Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos recomendó a todas las partes en el conflicto que respetaran el derecho internacional humanitario y adoptaran medidas para proteger a la población civil contra los peligros resultantes de las operaciones militares, incluidos los desplazamientos forzosos y arbitrarios³⁶.

15. Según la CIJ, las autoridades de Sri Lanka han demostrado no poder o no querer resolver el problema del creciente número de asesinatos selectivos de empleados de organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en el territorio controlado por el Gobierno³⁷. Asian Centre for Human Rights señaló que las investigaciones sobre la matanza de 17 trabajadores de Acción contra el Hambre, que se produjo en la localidad de Muttur el 5 de agosto de 2006, habían sido infructuosas³⁸.

16. En opinión de Amnistía Internacional, era evidente que en Sri Lanka se producían desapariciones forzadas de forma sistemática, no sólo en el norte y el este del país, sino también en la capital, Colombo. En la primera mitad de 2007 se denunciaron centenares de desapariciones forzadas. Amnistía Internacional señaló que muchas de las desapariciones se producían en las zonas de alta seguridad y durante el toque de queda, lo que indicaba que los autores de al menos algunas de ellas podrían haber sido personas que trabajaran directamente con las fuerzas de seguridad, o en connivencia con ellas, en particular el ejército de Sri Lanka³⁹. El Centro Asiático de Procedimientos de Recurso comunicó que algunas víctimas habían sido puestas en libertad, pero sólo tras el presunto pago de elevadas sumas o tras haber recibido la advertencia de no proseguir sus actividades o difundir información sobre sus captores. No obstante, la gran mayoría había desaparecido sin dejar rastro⁴⁰.

17. Tamil Information Centre denunció que las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y la policía infligían torturas y malos tratos en los campamentos militares y las comisarías de policía⁴¹. En el Informe conjunto de la sociedad civil se explicaba que a los detenidos se les negaba el derecho a la comunicación confidencial con su asesor letrado y que las entrevistas tenían lugar en presencia de personal de los servicios de seguridad, a lo que podía atribuirse la escasez de denuncias de torturas durante la detención⁴². Sri Lanka Democracy Forum señaló que en el Reglamento de Excepción estaba prevista la detención administrativa por períodos de hasta un año, sin la supervisión de los tribunales de justicia ordinarios y sin las salvaguardias contra la tortura previstas en el derecho internacional⁴³. Tamil Information Centre añadió que las disposiciones del Reglamento de Excepción y la Ley de prevención del terrorismo, que permitían presentar las confesiones como pruebas ante un tribunal, propiciaban la tortura⁴⁴. En opinión de Amnistía

Internacional, la aprobación de la Ley sobre la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1994 tenía por objeto criminalizar la tortura y procesar a los autores. Si bien fueron muchas las acusaciones formuladas en virtud de dicha ley, la mayoría de las causas incoadas contra agentes de policía o miembros de las fuerzas armadas por delitos de secuestro, detención ilegal o tortura se sobreseyeron por falta de pruebas y testigos⁴⁵.

18. En el Informe conjunto de la sociedad civil se citaban numerosos casos de abusos físicos y sexuales contra menores cometidos por familiares, profesores y miembros del clero⁴⁶. Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas señaló que en una reunión del Foro del Asia Meridional celebrada en julio de 2006, a raíz de la consulta regional de 2005 sobre el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, el Gobierno se comprometió a prohibir los castigos corporales en todos los entornos, incluido el hogar⁴⁷.

19. Sri Lankan Civil Society Working Group on Child Recruitment señaló que el reclutamiento por la fuerza de niños y la utilización de niños combatientes habían estado estrechamente ligados al violento conflicto étnico de Sri Lanka desde hacía tiempo⁴⁸. Sri Lanka Democracy Forum señaló con consternación que, a pesar de las garantías ofrecidas a las Naciones Unidas y del escrutinio internacional, los Tigres de Liberación Ealam Tamil y el grupo Karuna no habían cesado de reclutar a niños ni habían cumplido la promesa de liberar a los niños que integraban sus filas. Sri Lanka Democracy Forum señaló además que, si bien los Tigres de Liberación Ealam Tamil y Tamil Makkal Viduthalai Pulighal, también conocidos como el grupo Karuna, eran los principales responsables del reclutamiento, el Gobierno no podía eludir su parte de responsabilidad por los actos cometidos por Tamil Makkal Viduthalai Pulighal, habida cuenta de su manifiesta y estrecha asociación con ese grupo⁴⁹. Human Rights Watch pidió al Gobierno que pusiera fin inmediatamente a toda forma de cooperación con el grupo Karuna en lo referente al reclutamiento de menores y que cumpliera su promesa de investigar el papel de las fuerzas de seguridad en el reclutamiento de menores y otras formas de secuestro cometidas por el grupo Karuna y pedir cuentas a los responsables⁵⁰.

20. Según el Informe conjunto de la sociedad civil aumentaban los actos de violencia contra la mujer⁵¹. Asian Centre for Human Rights añadió que, durante la guerra, las mujeres se habían convertido en objetivos específicos por su género. En 2005, el Parlamento de Sri Lanka aprobó la Ley de prevención de la violencia doméstica, pero los recursos de la jurisdicción interna disponibles eran insuficientes⁵². Women and Media Collective explicó que a menudo se producían demoras de entre 5 y 12 años antes de que se resolvieran las causas contra los autores de delitos sexuales. Con respecto a la violencia doméstica, la mayoría de las denuncias formuladas ante la policía se resolvían por mediación policial o se remitían a las juntas de mediación y apenas se aplicaba la Ley sobre violencia doméstica⁵³.

21. International League for the Rights and Liberation of People advirtió que, en violación de las disposiciones legales, aún existían centros de detención no autorizados, no se comunicaban las detenciones a los tribunales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se informaba a los familiares de los detenidos, no se mantenía un registro de las detenciones y no se revelaban los lugares de detención⁵⁴. Amnistía Internacional expresó también su preocupación por la presunta falta de garantías procesales en relación con las detenciones⁵⁵. Con respecto a la falta de claridad de los procedimientos que había que seguir tras las detenciones, Amnistía Internacional señaló que no existía un registro centralizado de detenidos ni un procedimiento garantizado para informar a las familias y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el lugar de detención y formular una acusación en un plazo de 48 horas después de la detención⁵⁶. El Centro Asiático de Procedimientos de Recurso mencionó que en los últimos años había aumentado en Sri Lanka el número de

asesinatos de personas que se encontraban bajo custodia policial cometidos por agentes de policía que, posteriormente, alegaban haber actuado en legítima defensa para justificar las muertes⁵⁷. Según el Centro Asiático de Procedimientos de Recurso, las cárceles estaban abarrotadas y carecían de servicios e instalaciones básicos⁵⁸.

22. Women and Media Collective denunció que las mujeres detenidas con arreglo a las leyes de seguridad pública se habían quejado de que no se les aplicaban las garantías básicas. En los centros de detención para muchachas, no había separación entre las que habían delinquido y las que necesitaban atención y protección. Las muchachas que habían sufrido abusos sexuales permanecían detenidas hasta que se resolvían las causas contra sus agresores⁵⁹. Human Rights Watch exhortó al Gobierno a asegurarse de que todos los detenidos estuvieran recluidos en centros de detención reconocidos, con registros detallados, que pudieran mantener contacto con su familia y tener acceso ilimitado a un asesor letrado, que comparecieran inmediatamente ante un juez y que fueran informados de los motivos de su detención y de las acusaciones formuladas contra ellos⁶⁰.

3. Administración de justicia y estado de derecho

23. Asian Centre for Human Rights afirmó que las injerencias políticas en la Corte Suprema y en la Comisión de la Administración de Justicia habían perjudicado gravemente a la independencia del funcionamiento del poder judicial de Sri Lanka. Las transferencias arbitrarias de magistrados en casos notorios de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas redundaban en detrimento de la imparcialidad de los procedimientos⁶¹. El Centro Asiático de Procedimientos de Recurso añadió que el Departamento del Fiscal General ya no se percibía como una entidad independiente⁶². Minority Rights Group International destacó que el ejército no había respetado en la práctica los recientes fallos positivos de la Corte Suprema de Sri Lanka que restringían las operaciones militares de búsqueda, lo que había perjudicado gravemente a la función del poder judicial⁶³. Asian Centre for Human Rights instó al Gobierno a poner fin a las injerencias políticas en el funcionamiento del poder judicial a fin de asegurar la imparcialidad de los juicios y la administración de justicia, especialmente con la minoría tamil⁶⁴.

24. Amnistía Internacional expresó su grave preocupación por la persistencia del clima de impunidad por abusos de los derechos humanos en el contexto del conflicto, denunciado por los defensores de los derechos humanos y otros agentes de la sociedad civil de Sri Lanka⁶⁵. Human Rights Watch señaló que en los últimos dos años el Gobierno había creado al menos nueve órganos especializados para hacer frente al problema de las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos. No obstante, ninguno de esos órganos especializados había obtenido resultados concretos⁶⁶. Según Sri Lanka Democracy Forum, la legislación de excepción limitaba la responsabilidad de las autoridades civiles y militares al ofrecer inmunidad por todos los actos realizados de "buena fe" y añadió que la legislación de Sri Lanka no contenía disposiciones adecuadas para determinar la responsabilidad de mando⁶⁷. Human Rights Watch afirmó que el sistema de justicia penal, en particular la policía y la Fiscalía General, no habían investigado con eficacia las violaciones de los derechos humanos ni habían puesto a los autores a disposición judicial⁶⁸. Sri Lanka Democracy Forum señaló además que eran muy pocos los casos de violaciones de los derechos humanos que hubiesen sido determinados y juzgados. Incluso en los raros casos en que se iniciaron actuaciones judiciales, sólo fueron juzgados los oficiales subalternos, sin que se determinara ni investigara la responsabilidad del mando⁶⁹. Asian Centre for Human Rights destacó un caso poco habitual sucedido el 20 de enero de 2006, cuando la Corte Suprema en pleno, que juzgaba el caso de la matanza de Udathalawinna, condenó a muerte a cinco militares acusados de asesinar a diez jóvenes el 5 de diciembre de 2001, fecha en que se celebraron las elecciones generales⁷⁰.

25. Según la OMCT, Sri Lanka carecía de un programa de protección de testigos, aunque el Parlamento había debatido durante meses un proyecto de ley para establecerlo⁷¹.

26. Amnistía Internacional recomendó que el Gobierno investigara cuanto antes y de forma imparcial todas las denuncias de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas u otros malos tratos y otras violaciones graves de los derechos humanos, pusiera a los autores a disposición judicial e incoara procedimientos que cumplieran las normas internacionales de equidad y ofrecieran reparación a las víctimas y supervivientes⁷². Human Rights Watch pidió también al Gobierno que adoptara medidas disciplinarias contra los miembros de las fuerzas armadas o los juzgara, según correspondiera, incluidos los oficiales superiores, quienes debían asumir su responsabilidad cuando hubieran tenido conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que se estaban cometiendo delitos pero no hicieron nada al respecto⁷³.

4. Derecho a la intimidad, matrimonio y vida familiar

27. En el Informe conjunto de la sociedad civil se afirmaba que las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo seguían siendo delito de conformidad con los artículos 365 y 365A del Código Penal de 1883⁷⁴. La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays y Equality Ground expresaron inquietudes similares⁷⁵.

28. Women and Media Collective denunció que, en virtud de Ley sobre el estatuto personal de los musulmanes, las mujeres musulmanas no tenían los mismos derechos que los hombres en lo relativo al matrimonio y el divorcio. No existía una edad mínima para contraer matrimonio y la poligamia estaba reconocida en la citada ley. Women and Media Collective señaló además que, en teoría, el consentimiento de la mujer era indispensable para contraer matrimonio, pero en la práctica podían ser obligadas a casarse sin su consentimiento. Los hombres podían divorciarse sin alegar un motivo, pero las mujeres debían asumir la carga de la prueba. Las mujeres no podían desempeñar el cargo de jueces de familia ni registradores de matrimonio⁷⁶.

5. Libertad de circulación

29. Sri Lanka Democracy Forum señaló que el Gobierno y los Tigres de Liberación Ealam Tamil habían restringido los desplazamientos de la población civil que huía de los escenarios de enfrentamientos. Sri Lanka Democracy Forum denunció que el Gobierno había cerrado la carretera A9, que era la única ruta de acceso a Jaffna y de salida de la zona. El cierre de la carretera también restringe considerablemente el transporte de artículos esenciales como alimentos, suministros médicos y asistencia humanitaria⁷⁷. International Displacement Monitoring Centre añadió que los Tigres de Liberación Ealam Tamil seguían imponiendo restricciones draconianas a las personas que vivían en la zona de Vanni, sometida a su control. Las personas que salían de Vanni tenían que dejar atrás a algún familiar como garantía de su regreso⁷⁸.

6. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

30. Institute on Religion and Public Policy afirmó que, por lo común, el Gobierno y la sociedad en general respetaban y protegían la libertad religiosa en Sri Lanka; sin embargo, el proyecto de ley sobre conversión religiosa limitaría gravemente la libertad religiosa⁷⁹. Becket Fund for Religious Liberty señaló que el aspecto más preocupante de este proyecto de ley contra la conversión religiosa es que penalizaría un principio fundamental de la libertad religiosa, la capacidad para elegir o cambiar libremente la propia religión⁸⁰. La organización añadió que, desde 2001, la Corte Suprema había establecido una jurisprudencia que restringía los derechos de las religiones no budistas con

arreglo a la ley⁸¹. Institute on Religion and Public Policy señaló que ocasionalmente se registraban episodios de violencia y disturbios de carácter religioso⁸².

31. En el Informe conjunto de la sociedad civil se afirmó que la imposición de limitaciones estrictas a la información sobre la guerra había coartado gravemente la libertad de los medios de difusión⁸³. Sri Lanka Democracy Forum advirtió que el Reglamento de Excepción asfixiaba de forma alarmante la libertad de los medios de difusión y la libertad de expresión y permitía al Presidente prohibir toda reunión pública, procesión o concentración que, a su juicio, amenazara la seguridad nacional o el orden público⁸⁴. Según el Informe conjunto, los profesionales de la información y los medios de difusión habían sido víctimas de una serie de actos de violencia e intimidación, como asesinatos y agresiones, incendios premeditados e intimidación⁸⁵. Asian Centre for Human Rights instó al Gobierno a garantizar el funcionamiento independiente de la libertad de prensa y a no recurrir a la legislación contra el terrorismo para interrogar y detener a los profesionales de los medios de difusión con fines políticos⁸⁶. La OMCT señaló que los defensores de los derechos humanos de Sri Lanka se enfrentaban a persecuciones y amenazas crecientes contra su vida⁸⁷.

32. Según el Informe conjunto de la sociedad civil, el proceso legislativo de Sri Lanka se caracterizaba por la escasez de las consultas y la falta de transparencia en la preparación y promulgación de leyes y reglamentos, sin cabida para un debate abierto sobre opiniones alternativas. En muchos casos, la legislación se presentaba en el Parlamento como proyecto de ley urgente, lo que apenas dejaba ocasión para que el público pudiera formular objeciones contra las leyes que pudieran violar derechos fundamentales⁸⁸.

7. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

33. En el Informe conjunto se señaló que las plantaciones eran administradas por empresas privadas, y las cuestiones relativas a los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores se determinaban con arreglo a los convenios colectivos celebrados entre los sindicatos de las plantaciones y la patronal. Nunca se había reconocido una reivindicación tan importante para los trabajadores como un salario mensual⁸⁹.

34. Con referencia al Departamento de Censos y Estadística, Women and Media Collective informó de que la mayoría de las mujeres que formaban parte de la población activa encontraban trabajo como mano de obra semiespecializada o no especializada y ocupaban los niveles inferiores del mercado laboral. En el sector estructurado privado, las mujeres que habían aprobado el examen de acceso a la universidad y otros exámenes superiores percibían como promedio un 67% del salario que percibían los hombres con una formación académica similar. En el sector no estructurado esa diferencia era aún mayor. Las mujeres empleadas en las zonas de libre comercio no disfrutaban de los permisos a que tenían derecho los empleados del sector estatal y a menudo eran obligadas a trabajar horas extraordinarias sin su consentimiento. El agotamiento físico derivado de la intensidad y la naturaleza del trabajo a menudo mermaba su capacidad para desempeñar un empleo productivo de forma continuada⁹⁰.

8. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

35. Según Tamil Information Centre, desde agosto de 2006, el Gobierno había restringido el suministro de alimentos, combustible, medicamentos, materias primas y otros artículos esenciales en las zonas controladas por los Tigres de Liberación Ealam Tamil, en el noreste del país⁹¹. Por lo que respecta a la situación de los desplazados internos, el Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos del Consejo Noruego para los Refugiados advirtió que la atención de las necesidades de

subsistencia más inmediatas, como los alimentos, el agua y el alojamiento, planteaba enormes dificultades. El nivel de vida de la mayoría de ellos distaba mucho de ser satisfactorio y había mermado sus oportunidades de ejercer otros derechos, por ejemplo, al dificultar el acceso a la educación o la atención médica o reducir las oportunidades de ganarse la vida mediante el trabajo⁹².

36. Según la Asociación para la defensa de los pueblos amenazados, desde que las hostilidades se habían recrudecido, tanto el Gobierno como los Tigres de Liberación Ealam Tamil habían restringido el acceso a las zonas de conflicto, dejando a los desplazados internos y a otros muchos afectados sin protección internacional adecuada y sin acceso a la asistencia humanitaria. Debido al cierre de la carretera A9, el Programa Mundial de Alimentos sólo había podido enviar un 20% del total de alimentos asignados para atender las necesidades en la península de Jaffna, en el norte del país⁹³. El Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos añadió que el Gobierno aún negaba el acceso humanitario ilimitado a muchos organismos. En las zonas de repatriados de acceso controlado, sólo las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tenían permiso limitado para trabajar en determinados lugares. Los organismos de las Naciones Unidas, el CICR y las ONG internacionales sólo podían entrar en las zonas de repatriados de acceso controlado si seguían unos procedimientos establecidos⁹⁴. Según la OMCT, estas citadas restricciones y los ataques dirigidos contra los trabajadores humanitarios habían llevado a varias organizaciones a suspender sus actividades⁹⁵.

37. El Informe conjunto de la sociedad civil señaló la denegación de acceso a la interrupción legal del embarazo a las mujeres y muchachas que habían sido víctimas de violaciones o incestos. Añadía que la criminalización de la prostitución condenaba a las trabajadoras sexuales a la clandestinidad y las exponía, a ellas y a sus clientes, al riesgo de contraer el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual⁹⁶.

9. Minorías y pueblos indígenas

38. El Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos hizo alusión al temor de las comunidades minoritarias ante los programas patrocinados por el Estado para modificar la demografía étnica de la provincia Oriental. Varios residentes tamiles y musulmanes de la provincia Oriental mencionaron algunos ejemplos al Centro, en particular el desplazamiento, patrocinado por el Gobierno, de colonos cingaleses a zonas tamiles y musulmanas, la modificación de las fronteras administrativas a fin de reducir el tamaño de las poblaciones minoritarias en determinadas zonas y la consagración de las tierras ocupadas por las minorías para la construcción de templos budistas⁹⁷. People for Equality and Relief in Sri Lanka informó sobre el desalojo de casi 400 civiles tamiles de Colombo por la policía en junio de 2007, presuntamente porque no podían aducir motivos válidos que justificaran su presencia en Colombo en esas fechas⁹⁸.

39. La Comisión Islámica de Derechos Humanos denunció que las políticas del Gobierno habían perjudicado cada vez más a las minorías musulmanas que, a pesar de ello, se habían convertido en objetivo de ataques deliberados de los separatistas armados por su supuesto papel en el conflicto. Según la Comisión, el Gobierno había utilizado efectivos militares musulmanes para lanzar operaciones de combate contra los Tigres de Liberación Ealam Tamil en las que supuestamente se habían cometido agresiones contra la población civil tamil⁹⁹. Asian Centre for Human Rights añadió que 130.000 musulmanes desfallecen en los campamentos de refugiados en situación de pobreza abyecta y carecen de servicios básicos como la salud y la educación¹⁰⁰. Sri Lanka Democracy Forum instó a los Tigres de Liberación Ealam Tamil a que permitieran que las poblaciones tamil y musulmana ejercieran su derecho a la libertad de circulación, expresión, asociación y reunión, a participar en los asuntos públicos y votar y a la vida familiar, incluido el derecho a contraer matrimonio¹⁰¹.

40. Con respecto a la situación de los tamiles que trabajaban en las plantaciones del interior del país, en una comunicación conjunta presentada por ocho ONG (comunicación conjunta N° 1) se señaló que muchas de las cerca de 200.000 personas que habían adquirido la ciudadanía en virtud de la Ley de ciudadanía N° 35, de 2003, entre otras, estaban experimentando dificultades con las autoridades competentes, que les denegaban el derecho a inscribir sus nombres en el censo electoral. En la comunicación se señalaba además que muchas de las detenciones de jóvenes tamiles del interior del país se atribuyeron al hecho de que éstos no podían demostrar su identidad mediante documentos nacionales de identidad, puesto que en la plantación en que habían nacido la mayoría de ellos no se expedían dichos documentos¹⁰². En la comunicación se explicaba además que, si bien el tamil estaba reconocido como idioma oficial, los funcionarios del Gobierno destinados en las zonas de plantaciones del interior no lo hablaban, lo cual dificultaba la comunicación entre el pueblo tamil y los funcionarios¹⁰³. En el informe se destacó el aumento de la pobreza entre los habitantes de las plantaciones, la baja tasa de alfabetización y la falta o escasez de servicios básicos de atención de la salud en el sector de las plantaciones¹⁰⁴. También se señaló que en muchas plantaciones las mujeres eran obligadas a participar en programas de planificación de la familia y esterilización, lo que violaba sus derechos reproductivos¹⁰⁵.

10. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

41. Según Human Rights Watch, más de 125.000 mujeres de Sri Lanka emigraban todos los años a países extranjeros como trabajadoras. Aunque muchas formaron hogares y financiaron la educación de sus hijos con sus salarios, otras eran objeto de todo tipo de abusos a manos de los agentes de contratación y los empleadores y recibieron escasa protección de las autoridades de Sri Lanka o de los gobiernos extranjeros. A pesar de las recientes mejoras, el Gobierno de Sri Lanka no había regulado convenientemente el importante sector de la contratación laboral. Los servicios prestados por las misiones de Sri Lanka en el extranjero son desiguales. Cuando regresaban a Sri Lanka, muchos trabajadores domésticos dijeron haber experimentado dificultades para interponer denuncias y recibir servicios de atención a las víctimas¹⁰⁶.

42. Women and Media Collective añadió que en marzo de 2007 el Gobierno había intentado prohibir que las mujeres con hijos menores de 5 años buscaran trabajo en el extranjero. También señaló que los trabajadores migratorios en el extranjero no disponían de servicios para ejercer su derecho al voto en Sri Lanka¹⁰⁷.

11. Desplazados internos

43. Según Sri Lanka Democracy Forum hay al menos medio millón de víctimas de los desplazamientos internos inducidos por los conflictos, de las que se calcula que unas 300.000 se habían desplazado recientemente, tras la reanudación de las hostilidades en abril de 2006¹⁰⁸.

44. Sri Lanka Democracy Forum destacó que los desplazados internos vivían en condiciones de gran pobreza y no disponían de acceso adecuado a la vivienda, los servicios de atención de la salud y la educación y muchos de ellos habían sido desplazados en más de una ocasión¹⁰⁹. Women and Media Collective señaló que, dentro y fuera de los campamentos de desplazados internos, las familias temían por la seguridad de las mujeres jóvenes, ya que podían ser víctimas de agresiones sexuales, y por ese motivo concertaban "matrimonios" para sus hijas adolescentes. Las niñas no acudían a la escuela debido al aumento de los puestos de control. En muchos campamentos y centros de asistencia social los servicios son mínimos para atender cuestiones relacionadas con la salud, como la planificación familiar, la reproducción y la alimentación de los lactantes. Las mujeres solteras o viudas, que eran las responsables del bienestar de su familia entre los

desplazados, se encontraban en una situación especialmente desfavorecida en relación con el acceso a los servicios y prestaciones¹¹⁰.

45. Según Human Rights Watch, en el último año las autoridades gubernamentales habían obligado a los desplazados internos en algunos lugares del este del país a regresar a zonas que seguían siendo inseguras debido a las amenazas de los grupos armados, las minas terrestres o el riesgo de reanudación de los combates. Los desplazados habían recibido escasa protección, a pesar de la presencia del ACNUR, y son víctimas de amenazas frecuentes y agresiones ocasionales, incluido el reclutamiento forzoso por los Tigres de Liberación Ealam Tamil y los grupos armados partidarios del Gobierno. A otros se les ha impedido regresar a sus hogares al haberse establecido zonas de alta seguridad controladas por el ejército. Los que regresaron a menudo son objeto de represalias¹¹¹. Las organizaciones internacionales de asistencia y los órganos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el hecho de que el Gobierno obligara a los desplazados internos a regresar a regiones devastadas por los enfrentamientos¹¹².

12. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

46. La OMCT señaló que el Reglamento de Excepción contiene una definición amplia e imprecisa del delito de terrorismo que criminaliza todos los actos contra el orden público que tengan como fin provocar cambios políticos o de gobierno u obligar a las autoridades a adoptar o abstenerse de adoptar una medida concreta. Una definición tan vaga puede incluir actividades como la participación en manifestaciones o huelgas pacíficas, o su organización¹¹³. International League for the Rights and Liberation of People añadió que, en virtud de la Ley de prevención y prohibición del terrorismo y actividades terroristas específicas de diciembre de 2006, prácticamente cualquier actividad puede constituir delito y se autoriza la detención sin orden judicial y la prisión por un período de aproximadamente 12 meses sin cargos de toda persona que se considere que ha actuado en detrimento de la seguridad o el mantenimiento del orden público o la prestación de los servicios esenciales¹¹⁴. Asian Centre for Human Rights añadió que la legislación fomenta el clima de impunidad, al eximir de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad cuando se consideraba que han actuado de "buena fe"¹¹⁵.

III. LOGROS, PRÁCTICAS ÓPTIMAS, RETOS Y LIMITACIONES

47. Sri Lanka Democracy Forum informó sobre la creación del Ministerio de Gestión de Desastres y Derechos Humanos a finales de 2005, que había tomado algunas iniciativas en materia de derechos humanos, como el establecimiento de un comité interministerial que se comprometiera a realizar un seguimiento de las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos y un grupo consultivo de la sociedad civil¹¹⁶.

IV. PRIORIDADES, INICIATIVAS Y COMPROMISOS NACIONALES ESENCIALES

n.a.

V. FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA

n.a.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-Governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council.)

Civil Society

ACHR	Asian Centre for Human Rights*, New Delhi, India.
AI	Amnesty International*, London, United Kingdom.
ALRC	Asian Legal Resource Centre*, Hong Kong, China.
BFRL	The Becket Fund for Religious Liberty, Washington, D.C., USA.
COHRE	Centre on Housing Rights and Evictions*, Geneva, Switzerland.
CSW	Christian Solidarity Worldwide, New Malden, United Kingdom.
EG	Equal Ground, Colombo, Sri Lanka.
GIECP	Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, United Kingdom.
JS1	Joint submission (1) of Human Development Organization, International Movement against All Forms of Discrimination and Racism Asia Committee*, Satyodaya Centre, Citizen's Watch, University Students, HEARTS, Human Power Foundation, Up-Country teachers, Kandy, Sri Lanka.
HELP	HELP, Sri Lanka, Human Rights, Equality, and Lasting Peace, Washington, D.C., USA.
HRW	Human Rights Watch*, New York, NY, USA.
ITS	Ilankai Tamil Sangam, Maryknoll, NY, USA.
LIDLIP	International League for the Rights and Liberation of People*, Geneva, Switzerland.
ILGA	International Lesbian and Gay Association, ILGA-Europe*, Equal Ground Sri Lanka, International Gay and Lesbian Human Rights Commission, ARC International, joint submission, Brussels, Belgium.
IRPP	Institute on Religion and Public Policy, Washington, D.C., USA.
II/TCHR	Interfaith International*, Tamil Centre for Human Rights, joint submission, Geneva, Switzerland.
ICJ	International Commission of Jurists*, Geneva, Switzerland.
JS2	Joint submission (2) of International Dalit Solidarity Network, International Movement against All Forms of Discrimination and Racism Asia Committee*, Human Development Organisation, Copenhagen, Denmark.
IDMC	International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva, Switzerland.
IED/AHL	International Educational Development, Inc.*, Association of Humanitarian Lawyers, joint submission, San Francisco, CA, USA.
IHRC	Islamic Human Rights Commission, Wembley, United Kingdom.
JCSR	Joint Civil Society Report, jointly submitted by Association of Family Members of the Disappeared, Association of War Affected Women, Centre for Human Rights and Development, Centre for Policy Alternatives, Centre for Society and Religion, Centre for Women and Development, Christian Alliance for Social Action, Citizens' Committee, Community Trust Fund, Ecumenical Association of Third World Theologians, Equal Ground, Families of the Disappeared, Father J. J. Bernard, Free Media Movement, Gampaha District Human Rights Committee, Dr. Mario Gomez, Home for Human Rights, Human Development Organisation, INFORM Human Rights Documentation Centre, International Friends for Global Peace, International Movement Against Discrimination and Racism, Law & Society Trust, Muslim Information Centre, Research and Action Forum for Social Development, Rights Now - Collective for Democracy, Right to Life Human Rights Centre, Transparency International Sri Lanka, United Federation of Labour, Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka.
MAN	Manitham, Chennai, Tamil Nadu, India.
MRG	Minority Rights Group International*, London, United Kingdom.
OMCT	World Organisation Against Torture*, Geneva, Switzerland.
PEARL	People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA.
SLDF	Sri Lanka Democracy Forum, USA.
SLCSWG	Sri Lankan Civil Society Working Group on Child Recruitment (Centre for Policy Alternatives, Institute of Human Rights, National Peace Council, Law and Society Trust, Mothers and Daughters of Lanka, International Movement against All Forms of Discrimination), joint submission, Colombo, Sri Lanka.
STP	Society for Threatened Peoples*, Göttingen, Germany.
TIC	Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom.

TRO Tamils Rehabilitation Organisation, Colombo, Sri Lanka.
WMC Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka.

- ² World Organisation Against Torture, Geneva, Switzerland, p.2. See also Amnesty International, London, United Kingdom, p.2; Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.7.
- ³ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.4.
- ⁴ Amnesty International, London, United Kingdom, p.1-2. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.2; Interfaith International/Tamil Centre for Human Rights, joint submission, Geneva, Switzerland, p.1; International League for the Rights and Liberation of People, Geneva, Switzerland, p.3.
- ⁵ Amnesty International, London, United Kingdom, p.4. See also Manitham, Tamil Nadu, India, p. 3.
- ⁶ Amnesty International, London, United Kingdom, p.1.
- ⁷ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.5-6. See also Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.3-4; Amnesty International, London, United Kingdom, p.1.
- ⁸ World Organisation Against Torture, Geneva, Switzerland, p.2. See also People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.5.
- ⁹ Amnesty International, London, United Kingdom, p.1. See also Minority Rights Group International, London, United Kingdom, p.2; Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.3-4.
- ¹⁰ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.3-4. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.6; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.4; International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, p.4.
- ¹¹ People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.1-2.
- ¹² Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.5. See also Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.3-4.
- ¹³ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.6. See also Amnesty International, London, United Kingdom, p.4; Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.5; International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, p.4; Society for Threatened Peoples, Göttingen, Germany, p.2-3; Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.3; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.4; World Organisation Against Torture, Geneva, Switzerland, p.1; Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.3-4; People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.1.
- ¹⁴ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.6.
- ¹⁵ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.5.
- ¹⁶ International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, p.5. See also People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.4.
- ¹⁷ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.7.
- ¹⁸ Christian Solidarity Worldwide, New Malden, United Kingdom, p.2-3.
- ¹⁹ International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, p.5.
- ²⁰ Joint submission (2), Copenhagen, Denmark, p.4.
- ²¹ Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka, p.1, 4-5.
- ²² Centre on Housing Rights and Evictions, Geneva, Switzerland, p.8.
- ²³ Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka, p.3.
- ²⁴ Joint submission (2), Copenhagen, Denmark, p.1.
- ²⁵ Joint submission (2), Copenhagen, Denmark, p.5.
- ²⁶ Equal Ground, Colombo, Sri Lanka, p.1. See also International Lesbian and Gay Association, joint submission, Brussels, Belgium, p.1.
- ²⁷ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.6.
- ²⁸ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.1.

- ²⁹ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.1. See also HELP, Sri Lanka, Human Rights, Equality, and Lasting Peace, Washington, D.C., USA, p.2.
- ³⁰ Christian Solidarity Worldwide, New Malden, United Kingdom, p.3. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.2; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.3.
- ³¹ Minority Rights Group International, London, United Kingdom, p.1-2. See also Asian Legal Resource Centre, Hong Kong, China, p.3; Ilankai Tamil Sangam, p. 3 and Manitham p. 3; Ilankai Tamil Sangam, Maryknoll, NY, USA, p. 3 and Manitham, Tamil Nadu, India, p. 3.
- ³² Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.1. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.7; Amnesty International, London, United Kingdom, p.2; People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.5.
- ³³ People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.5.
- ³⁴ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.6.
- ³⁵ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.4. See also International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva, Switzerland, p.2.
- ³⁶ International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva, Switzerland, p.6-7.
- ³⁷ International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, p.3-4. See also Amnesty International, London, United Kingdom, p.3; Minority Rights Group International, London, United Kingdom, p.2; People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.3; Tamils Rehabilitation Organisation, Colombo, Sri Lanka, p.1-3, also for information on individual cases.
- ³⁸ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.5-6.
- ³⁹ Amnesty International, London, United Kingdom, p.2. See also International League for the Rights and Liberation of People, Geneva, Switzerland, p.2-3.
- ⁴⁰ Asian Legal Resource Centre, Hong Kong, China, p.2-3. See also Christian Solidarity Worldwide, New Malden, United Kingdom, p.3-4; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.3, also for information on individual cases.
- ⁴¹ Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.2. See also People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.4; Asian Legal Resource Centre, Hong Kong, China, p.1; Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.3.
- ⁴² Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.6-7.
- ⁴³ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.3.
- ⁴⁴ Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.2.
- ⁴⁵ Amnesty International, London, United Kingdom, p.4.
- ⁴⁶ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.6.
- ⁴⁷ Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, United Kingdom, p.2.
- ⁴⁸ Sri Lankan Civil Society Working Group on Child Recruitment, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.1.
- ⁴⁹ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.7-8. See also Amnesty International, London, United Kingdom, p.3; Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.3; People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.3; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.3; Society for Threatened Peoples, Göttingen, Germany, p.2; Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.4; Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.3.
- ⁵⁰ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.5-6.
- ⁵¹ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.5.
- ⁵² Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.4.
- ⁵³ Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka, p.2.
- ⁵⁴ International League for the Rights and Liberation of People, Geneva, Switzerland, p.3. See also Amnesty International, London, United Kingdom, p.4.

- ⁵⁵ Amnesty International, London, United Kingdom, p.3. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.3; Minority Rights Group International, London, United Kingdom, p.1. See also People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.4; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.1.
- ⁵⁶ Amnesty International, London, United Kingdom, p.4.
- ⁵⁷ Asian Legal Resource Centre, Hong Kong, China, p.2; see also for information on individual cases. See also Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.1-2.
- ⁵⁸ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.3.
- ⁵⁹ Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka, p.2.
- ⁶⁰ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.5-6.
- ⁶¹ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.5. See also International League for the Rights and Liberation of People, Geneva, Switzerland, p. 3, 4; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.4-5.
- ⁶² Asian Legal Resource Centre, Hong Kong, China, p.4. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.5.
- ⁶³ Minority Rights Group International, London, United Kingdom, p.2.
- ⁶⁴ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.6-7.
- ⁶⁵ Amnesty International, London, United Kingdom, p.4. See also World Organisation Against Torture, Geneva, Switzerland, p.1; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.3; Minority Rights Group International, London, United Kingdom, p.2; International League for the Rights and Liberation of People, Geneva, Switzerland, p.4.
- ⁶⁶ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.2. See also Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.2; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.3.
- ⁶⁷ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.4. See also International League for the Rights and Liberation of People, Geneva, Switzerland, p.3; World Organisation Against Torture, Geneva, Switzerland, p.2-3.
- ⁶⁸ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.3-4. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.4.
- ⁶⁹ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.5.
- ⁷⁰ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.3.
- ⁷¹ OMCT, p.2. See also International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, p.4.
- ⁷² Amnesty International, London, United Kingdom, p.4-5.
- ⁷³ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.5-6.
- ⁷⁴ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.6.
- ⁷⁵ International Lesbian and Gay Association, joint submission, Brussels, Belgium, p.1. See also Equal Ground, Colombo, Sri Lanka, p.1.
- ⁷⁶ Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka, p.1, 4-5.
- ⁷⁷ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.4.
- ⁷⁸ IDMC, p.2.
- ⁷⁹ Institute on Religion and Public Policy, Washington, D.C., USA, p.1. See also Christian Solidarity Worldwide, New Malden, United Kingdom, p.6.
- ⁸⁰ The Becket Fund for Religious Liberty, Washington, D.C., USA, p.2-3.
- ⁸¹ The Becket Fund for Religious Liberty, Washington, D.C., USA, p.1-2.
- ⁸² Institute on Religion and Public Policy, Washington, D.C., USA, p.1. See also People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.5; Christian Solidarity Worldwide, New Malden, United Kingdom, p.5; Interfaith International/Tamil Centre for Human Rights, joint submission, Geneva, Switzerland, p.2.
- ⁸³ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.5.
- ⁸⁴ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.9. See also Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.2.

⁸⁵ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.5. See also Amnesty International, London, United Kingdom, p.4; Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.6; Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.9; People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.5; Society for Threatened Peoples, Göttingen, Germany, p.3.

⁸⁶ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.6-7.

⁸⁷ World Organisation Against Torture, Geneva, Switzerland, p.2. See also Amnesty International, London, United Kingdom, p.4; Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.4.

⁸⁸ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.6.

⁸⁹ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.4.

⁹⁰ Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka, p.3-4.

⁹¹ Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.5.

⁹² International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva, Switzerland, p.3; see for more details.

⁹³ Society for Threatened Peoples, Göttingen, Germany, p.1. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.4; HELP, Sri Lanka, Human Rights, Equality, and Lasting Peace, Washington, D.C., USA, p.2.

⁹⁴ International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva, Switzerland, p.6. See also Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.2-3.

⁹⁵ World Organisation Against Torture, Geneva, Switzerland, p.3.

⁹⁶ Joint Civil Society Report, joint submission, Colombo, Sri Lanka, p.5-6.

⁹⁷ International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva, Switzerland, p.1-2.

⁹⁸ People for Equality and Relief in Lanka, Glenn Dale, USA, p.2. See also Interfaith International/Tamil Centre for Human Rights, joint submission, Geneva, Switzerland, p.2.

⁹⁹ Islamic Human Rights Commission, Wembley, United Kingdom, p.2.

¹⁰⁰ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.5.

¹⁰¹ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.10.

¹⁰² Joint submission (1), Kandy, Sri Lanka, p.2.

¹⁰³ Joint submission (1), Kandy, Sri Lanka, p.2.

¹⁰⁴ Joint submission (1), Kandy, Sri Lanka, p.2-3.

¹⁰⁵ Joint submission (1), Kandy, Sri Lanka, p.3-4.

¹⁰⁶ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.4-5.

¹⁰⁷ Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka, p.4.

¹⁰⁸ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.4. See also Christian Solidarity Worldwide, New Malden, United Kingdom, p.3; International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Geneva, Switzerland, p.1; Minority Rights Group International, London, United Kingdom, p.1; Ilankai Tamil Sangam, Maryknoll, NY, USA, p.3.

¹⁰⁹ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.4. See also Centre on Housing Rights and Evictions, Geneva, Switzerland, p.4; Society for Threatened Peoples, Göttingen, Germany, p.1; Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.5.

¹¹⁰ Women and Media Collective, Colombo, Sri Lanka, p.3.

¹¹¹ Human Rights Watch, New York, NY, USA, p.3. See also Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.4; Minority Rights Group International, London, United Kingdom, p.1; Amnesty International, London, United Kingdom, p.3; Centre on Housing Rights and Evictions, Geneva, Switzerland, p.5; Interfaith International/Tamil Centre for Human Rights, joint submission, Geneva, Switzerland, p.2.

¹¹² Society for Threatened Peoples, Göttingen, Germany, p.1.

¹¹³ World Organisation Against Torture, Geneva, Switzerland, p.2-3.

¹¹⁴ International League for the Rights and Liberation of People, Geneva, Switzerland, p.3. See also Tamil Information Centre, Kingston Upon Thames, United Kingdom, p.2.

¹¹⁵ Asian Centre for Human Rights, New Delhi, India, p.2.

¹¹⁶ Sri Lanka Democracy Forum, USA, p.7.
